



Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha - Cundinamarca

Tipo de Proceso		Acción de Tutela	
Radicación del Proceso		257543103002 202400078	
Accionante	Jeisson Albeiro Fonseca Mesa		
Accionado	SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.		
Derecho	Petición	Decisión	Tutela Mecanismo transitorio
Soacha, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)			

Asunto para Tratar

Corresponde al Despacho resolver la solicitud de tutela impetrada por **Jeisson Albeiro Fonseca Mesa** en contra de la entidad **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.**

Solicitud de Amparo

Obra escrito tutelar, donde la accionante plantea sus pretensiones. Folio digital [0004EscritoTutela20240313.pdf](#)

Trámite

La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), en el cual, se ordenó notificar a las partes para que ejercieran su derecho de defensa y quienes intervengan en el proceso.

La accionada **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.** mediante correo electrónico con fecha del catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), allega escrito de contestación al presente instrumento constitucional por intermedio Anyi Sharlyn Marín Camargo apoderado general judicial; indica en su parte pertinente:

“De acuerdo con dicha comunicación, el plazo ampliado de 15 días más comenzará a contabilizarse a partir del 14 de marzo y su vencimiento será el 8 de abril de 2024. En este punto es importante indicar, que la respuesta fue remitida por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., al correo electrónico registrado en la petición del accionante fonsecajeisson@hotmail.co, y así mismo fue cargada el 13 de marzo hogaño a través del módulo de PQRS (mismo medio por donde fue presentada, tal y como se evidencia a continuación y/o a través del siguiente enlace (...).” Folio digital

[0009ContestacionTutelaSaeSas20240314.pdf](#)

Fundamentos de la Decisión

Problema Jurídico

Corresponde al Juez de tutela, determinar si la entidad accionada **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.**, está transgrediendo presuntamente la garantía constitucional a la petición, al no resolverse de fondo la petición elevada por el aquí accionante, dentro del término legal conferido para ello.

Petición

El derecho de petición, visto desde la órbita del Estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona- Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales, como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20240078	
Soacha, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)	

El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de esta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.

La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

Un derecho de petición no se considera debidamente tramitado con su recepción, ni tampoco con una respuesta laxa y abierta, pues por mandato constitucional la entidad ante quien se haya elevado la solicitud está en la obligación de proveer al ciudadano de una respuesta pronta que satisfaga plenamente sus deprecaciones. Entonces, de no cumplirse con estos supuestos, el juez constitucional, estará en la obligación de requerir a quien vaya en contravía del derecho fundamental para que entre a resolver de manera inmediata el asunto objeto de pedimento.

Competencia

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

Caso en Concreto

Según el dicho de la accionante, interpone el presente instrumento constitucional, solicitando:

“ II. Pretensiones

Solicitó señor Juez de Tutela que se ampare mi Derecho Constitucional de Derecho de Petición, por medio de la Acción de Tutela y se proceda de fondo a que la SAE - Sociedad de Activos Especiales representada por José Daniel Rojas Medellín identificado con cédula de ciudadanía No. 81.717.276 a que me dé respuesta de fondo a mí petición radicada el día 21 de Febrero de 2024.

Se tutele mi derecho fundamental de petición.

Como consecuencia, se ordene a SAE - Sociedad de Activos Especiales representada por José Daniel Rojas Medellín, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombiana..”

Por lo que se refiere al derecho de petición, la Honorable Corte Constitución, ha establecido en repetidas oportunidades, que la acción de tutela resulta procedente en relación con este derecho fundamental así:

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20240078	
Soacha, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)	

“En cuanto a este punto, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en afirmar que la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales. De igual manera, se ha sostenido que al tener el derecho de petición aplicación inmediata, el amparo constitucional es un mecanismo principal para su protección. Dijo la Corte en una ocasión: “(d)ado que la señora Rueda Villalba expone en su escrito de tutela la posible afectación de su derecho fundamental de petición, la acción de tutela sería procedente de manera directa en tanto se refiere a un derecho fundamental de aplicación inmediata, situación que se verifica en abundante jurisprudencia de esta Corporación”. (Sentencia T-084 - 15, 2015)

El Alto Tribunal constitucional determinó que el derecho de petición es un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, siendo este una manera de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes. A causa de lo anterior considera este Despacho judicial, pertinente y útil citar la Sentencia T – 206 – 18, en la cual se desarrolla la finalidad que tiene el derecho de petición:

“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.

El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”

El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones. De dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20240078	
Soacha, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)	

pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. (Sentencia T - 206 - 18, 2018)

De conformidad con las documentales adosas al plenario, avizora esta Juzgadora, que la accionada **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.**, mediante correo electrónico con fecha del catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), allega escrito de contestación al presente instrumento constitucional por intermedio Anyi Sharlyn Marín Camargo apoderado general judicial; indica en su parte pertinente: *“De acuerdo con dicha comunicación, el plazo ampliado de 15 días más comenzará a contabilizarse a partir del 14 de marzo y su vencimiento será el 8 de abril de 2024. En este punto es importante indicar, que la respuesta fue remitida por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., al correo electrónico registrado en la petición del accionante fonsecajeisson@hotmail.co, y así mismo fue cargada el 13 de marzo hogaño a través del módulo de PQRS (mismo medio por donde fue presentada, tal y como se evidencia a continuación y/o a través del siguiente enlace).*

De conformidad con la solicitud elevada por la accionada, y aras de salvaguardar el derecho de petición que le asiste al accionante, se concede el término de diez (10) días, para que allegue la totalidad de la información solicitada en el derecho de petición calendado 20 de febrero de 2024, adosado como anexo en el presente instrumento constitucional.

A lo anterior, se Ordenará a la entidad accionada **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.**, que en el plazo máximo de diez (10) días, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a dar respuesta a la petición elevada por el accionante de manera oportuna, resolviendo de fondo siendo clara, precisa y en congruencia con lo solicitado, comunicándole al peticionario con claridad lo relacionado a la solicitud elevada el 20 de febrero de 2024, y adosando la documental pertinente.

Siendo estos el argumento para conceder transitoriamente la acción constitucional solicitada por la parte accionante en sede de tutela.

En mérito de lo expuesto, este juzgado en instancia de juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la ley.

Resuelve

Primero: Conceder transitoriamente el amparo solicitado por el accionante **Jeisson Albeiro Fonseca Mesa**, de conformidad con la aparte considerativa del presente fallo.

Segundo: Ordenar la entidad accionada **SAE – Sociedad de Activos Especiales Gecar Ingeniería S.A.S.** que en el plazo máximo de diez (10) días, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a dar respuesta a la petición elevada por la accionante de manera oportuna, resolviendo de fondo siendo clara, precisa y en congruencia con lo solicitado, comunicándole a la peticionaria con claridad lo

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 20240078	
Soacha, tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)	

relacionado a la solicitud elevada el 20 de febrero de 2024, y adosando la documental pertinente.

Tercero: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Cuarto: De no ser impugnada esta decisión remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase


Paula Andrea Giraldo Hernández
Juez



Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Soacha - Cundinamarca

Firmado Por:
Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2e269f604a0b79e33724745e452970863e7a7bfecd9261f4241a6353e1ce748**

Documento generado en 03/04/2024 05:59:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>